

PATRIMONIO-ARAGÓN

HERALDO
DE ARAGÓN

Cataluña pretende la competencia exclusiva del núcleo principal del Archivo de la Corona

El Estatuto catalán rompe el pacto asumido con Aragón, Baleares y Valencia y se arroga el derecho sobre el Archivo Real de Barcelona.



Fotógrafo: EFE
La ministra de Cultura, Carmen Calvo

JESÚS MORALES. Madrid | Cataluña pretende asumir la competencia exclusiva sobre los documentos más relevantes que conforman el Archivo de la Corona de Aragón. El proyecto de Estatuto enviado al Congreso de los Diputados propone que sólo la Generalitat sea competente sobre "el Archivo Real de Barcelona y los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón". Se da la circunstancia de que el Archivo Real supone la base sobre la que se sustenta el actual Archivo de la Corona de Aragón, hasta el momento de titularidad estatal.

Con esta propuesta, el Parlamento catalán rompe un acuerdo de más de 20 años de vigencia. El motivo es que Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares -tras la aprobación de la Constitución- adoptaron en sus respectivos Estatutos de Autonomía un artículo común que hacía referencia a una gestión conjunta del Archivo de la Corona de Aragón. En todos se reconocía la voluntad de cooperación y de participación "preeminente" de cada una de las Comunidades.

El proyecto de Estatuto catalán ya no respeta esa redacción y da un sentido totalmente diferente al acuerdo. Sí hace referencia al Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, pero distingue entre el Archivo Real de Barcelona y el propio Archivo de la Corona, cuando éste último no es sino una suma de fondos que incluye el primero.

"El resto de fondos"

Además, deja claro que el Patronato sólo tendría capacidad de gestión sobre "el resto de fondos comunes con otros territorios", dejando el núcleo esencial de los documentos que reflejan la historia de la Corona de Aragón bajo el control exclusivo de la Generalitat, que aprovecha que el Gobierno central siempre ha mantenido en Barcelona la sede de este archivo.

Fuentes parlamentarias aseguran que el texto sufrirá modificaciones a lo largo de la tramitación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las negociaciones están versando de momento sobre asuntos muy diferentes y parece complicado que Cataluña acepte volver en este punto a la redacción de su Estatuto de 1979.

Este intento catalán de apropiarse del archivo estatal es el más importante, pero no el primero. El Parlamento vecino fue pionero en incluir a través de una ley el Archivo de la Corona de Aragón en su sistema autonómico de archivos. El Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional esta norma, que fue primero suspendida temporalmente y ahora vuelve a estar en vigor, a la espera de que haya una sentencia.

El PP fue especialmente duro con esta decisión del Parlamento catalán, pero eso no impidió que el Gobierno Valenciano tomase nota y aprobase una ley en los mismos términos. En este caso, la ley está suspendida en ese precepto, a la espera de sentencia. La diferencia entre ambas normas autonómicas es que la catalana sí tenía efectos, en cuanto que el archivo está en Barcelona, mientras que la valenciana suponía una declaración política con menor efecto real.

Recurrido por dos gobiernos

Se da la circunstancia de que la primera ley fue recurrida por el Gobierno central del PP y la segunda por el del PSOE. Es decir, que ambos partidos se han mostrado en contra de que una Comunidad Autónoma de la antigua Corona de Aragón tome como propio un archivo que es de titularidad estatal.

Aragón y Baleares conservan de forma casi idéntica la redacción de sus artículos estatutarios sobre este asunto. En el caso valenciano, se han incluido cambios en la reforma que ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Mantiene el mismo texto, pero introduce la frase de que el Archivo es "patrimonio histórico del Pueblo Valenciano compartido con otros

pueblos de España".

En el caso del proceso de reforma que tiene abierto el Estatuto aragonés, todavía no se han previsto cambios en la redacción original. Otra cuestión es qué ocurrirá si el Congreso de los Diputados da luz verde al texto que ha propuesto el Parlamento catalán.

El Estatuto catalán cuenta con enmiendas en todo su articulado, por lo que los diferentes partidos con representación parlamentaria podrían proponer textos alternativos que faciliten no cambiar la situación que -hasta ahora- está legalmente vigente.